

OPINIÓN

El alza de los combustibles redefine la movilidad en Chile

Dr. Lorenzo Reyes Bozo
Decano Facultad de Ingeniería y Negocios
Universidad de Las Américas

El 2026 representa un punto de inflexión en la evolución de la electromovilidad en Chile. Un proceso que hasta hace poco avanzaba de forma gradual, impulsado por políticas públicas y compromisos ambientales, ha dado paso a una expansión acelerada guiada por variables económicas. La discusión ya no radica en si el país avanzará hacia la electrificación del transporte, sino en la velocidad y condiciones en que este cambio se consolidará.

Las cifras del mercado reflejan esta transformación. Durante el primer trimestre de 2026, las ventas de vehículos eléctricos superaron las 11.900 unidades, con un crecimiento cercano al 94% respecto del año anterior. Este impulso se intensificó en marzo, cuando las ventas mensuales registraron un alza cercana al 148%, evidenciando un cambio significativo en el comportamiento de los consumidores. Los vehículos híbridos no enchufables continúan liderando el mercado, favorecidos por su menor costo y por no requerir infraestructura de carga. En contraste, los vehículos enchufables —tanto eléctricos puros como híbridos— exhiben las mayores tasas de crecimiento, aunque su participación aún es limitada.

Este dinamismo también se observa en la micromovilidad, en la que bicicletas y scooters eléctricos han experimentado una expansión sostenida, con expectativas de crecimiento cercanas al 50% en algunos segmentos. Este fenómeno responde a nuevas dinámicas urbanas, donde la eficiencia en costos, la adaptabilidad y la reducción de tiempos de desplazamiento adquieren creciente relevancia.

En los últimos meses el aumento sostenido en los precios de los combustibles ha gatillado las ventas de vehículos eléctricos e híbridos, con incrementos que han superado el 30%. Este escenario ha modificado la lógica de decisión de los consumidores, desplazando la atención desde el costo inicial de compra hacia el costo total de operación. En este contexto, la electromovilidad deja de ser percibida como una alternativa de nicho y se posiciona como una opción económicamente competitiva. En términos prácticos, las señales del mercado han logrado acelerar la adopción en plazos considerablemente más breves que los observados bajo el solo impulso regulatorio.

EDITORIAL

¿Escuchan en La Moneda?

Tras más de un año de contingencia, la plaga de mosca de la fruta dejó de ser un problema acotado para transformarse en una amenaza estructural para la agricultura regional.

La prolongada presencia de la mosca de la fruta en la Región de Coquimbo dejó de ser una contingencia pasajera. Hoy es una crisis instalada que golpea con fuerza a pequeños y medianos productores, tensiona los sistemas de control y pone en riesgo la seguridad alimentaria y la economía local. Un año después de la primera captura, la pregunta ya no es cómo contenerla, sino por qué no se ha logrado hacerlo con la eficacia que la situación demanda.

Las campañas se mantienen activas en Monte Patria, los protocolos se endurecen y las restricciones se multiplican. Sin embargo, en el territorio el efecto es inverso: más dificultades para producir, más trabas para comercializar y una sensación creciente de abandono. La realidad de los agricultores locales —lejos de la lógica de la agroexportación— no está siendo considerada con la urgencia ni la pertinencia necesarias. Exigir estándares sin garantizar condiciones es, en la práctica, condenar a muchos a la paralización. El diagnóstico es claro y, más aún, ha sido

reconocido por la propia autoridad: el problema está “desbordado”. Esa afirmación no puede quedar solo en una declaración. Debe traducirse en decisiones concretas, recursos extraordinarios y un rediseño inmediato de la estrategia. Porque cuando una crisis supera la capacidad local, es el nivel central el que debe asumir el liderazgo.

Hoy se requiere algo más que fiscalización y control. Se necesita apoyo real a los productores, acceso a infraestructura, ajustes a los protocolos sanitarios y una coordinación efectiva entre organismos públicos. También es clave revisar los instrumentos de seguro agrícola, que en muchos casos no están respondiendo a la magnitud de las pérdidas.

La demora en las autorizaciones, la centralización de decisiones y la falta de flexibilidad operativa están agravando el problema. Cada semana de espera se traduce en fruta que pierde valor, en ingresos que no llegan y en familias que ven peligrar su sustento. No es solo una crisis sanitaria: es una crisis social y económica.

CARTA

Terremotos: tarea aún pendiente

María Inés Díaz
Jefa de Carrera de Ingeniería en Geomensura y Cartografía, Universidad Bernardo O'Higgins Académica UBO

Chile es uno de los países más sísmicamente activos del mundo. Su ubicación en el denominado “Cinturón de Fuego del Pacífico” lo expone de manera permanente a terremotos de gran magnitud y a los tsunamis que frecuentemente los acompañan. Esta condición ha forjado, a lo largo de décadas

y a partir de tragedias como el terremoto de Valdivia de 1960 (Mw 9,5) y el del Maule de 2010, una institucionalidad científica y normativa orientada a reducir el impacto humano y material de estos eventos.

Entre los avances más significativos destaca la consolidación del Centro Sismológico Nacional (CSN), que opera una de las redes de monitoreo sísmico más densas de América del Sur, entregando datos en tiempo real que alimentan los sistemas de alerta temprana. El SHOA, por su parte, ha fortalecido notablemente sus protocolos de alerta de tsunamis desde 2010, con resultados concretos en la preservación de vidas durante eventos como el terremoto de Illapel de 2015. A esto se suma la actualización y aplicación rigurosa de normas de construcción sismo-resistente, que posicionan a la edificación urbana chilena como referente regional en resiliencia estructural.

Sin embargo, persisten desafíos relevantes. La cobertura de los

sistemas de alerta temprana no alcanza de manera homogénea a las comunidades más vulnerables y alejadas. La cultura de riesgo, aunque creciente, aún requiere mayor integración en la educación formal y en la planificación territorial. La brecha entre el conocimiento científico disponible y su traducción efectiva en políticas públicas locales sigue siendo una asignatura pendiente, especialmente en zonas rurales y comunidades indígenas con alta exposición al peligro sísmico.

El camino recorrido es significativo, pero la tarea no está completa. Reducir el impacto de los terremotos exige sostener y profundizar la inversión en ciencia, tecnología e institucionalidad, así como garantizar que sus beneficios lleguen de forma equitativa a toda la población. La experiencia chilena demuestra que la vulnerabilidad no es un destino inevitable: con voluntad política, rigor científico y compromiso comunitario, es posible construir sociedades más seguras frente a la amenaza sísmica.



FUNDADO EL 1 DE ABRIL DE 1944
PROPIETARIO:
ANTONIO PUGA S.A.
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL:
FRANCISCO PUGA MEDINA
EDITORIA GENERAL:
LUCÍA DÍAZ GALVEZ

LA SERENA
Brasil 431, Casilla 556.
MESA CENTRAL: Fono (51) 2 200400
GERENCIA: Fono (51) 2 200410
CIRCULACION: Brasil 431.
Fono: (51) 2 200400. La Serena
PUBLICIDAD: Fono (51) 2 200410
SUSCRIPCIONES: Fono(51) 2 200400

COQUIMBO
CENTRO IMPRESOR
El Día Barrio Industrial.
Calle Nueva Dos 1240.
Fono (51) 2 200400

OVALLE
Miguel Aguirre 109.
Fono: (53)2 448271 - (53)2 448272
Horario de atención lunes a viernes de 09:30 a 12:45 horas 15:30 a 18:00 horas.
Sábados de 10:00 a 12:00 horas.